



Resolución No. CSJBOR23-642
Cartagena de Indias D.T. y C., 8 de junio de 2023

“Por medio de la cual se decide una solicitud de vigilancia judicial administrativa”

Vigilancia judicial administrativa No: 13001-11-01-002-2023-00303

Solicitante: María Claudia Galvis Feria

Despacho: Juzgado 1° Promiscuo de Familia de Mompox

Servidor judicial: Judith Beleño Beleño y Emi Johanna Chamorro Racero

Tipo de proceso: Cesación de efectos civiles de matrimonio religioso

Radicado: 13-468-3184-001-2022-00052-00

Magistrado ponente: Iván Eduardo Latorre Gamboa

Fecha de sesión: 7 de junio de 2023

I. ANTECEDENTES

1.1 Solicitud de vigilancia judicial administrativa

Por mensaje de datos recibido el día 3 de mayo del año en curso, la abogada María Claudia

Galvis Feria solicitó que se ejerza vigilancia judicial administrativa sobre el proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio identificado con el radicado No. 13-468-3184-001- 2022-00052-00, que cursa en el Juzgado 1° Promiscuo de Familia de Mompox, debido a que, según afirma, el proceso se encuentra pendiente por fijar fecha para audiencia inicial.

1.2 Trámite de la vigilancia judicial administrativa

Por considerar que la solicitud de vigilancia judicial cumplía con los requisitos consignados en el artículo 3° del Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011, mediante Auto o CSJBOAVJ23- 335 del 8 de mayo de 2023, notificado el 10 de mayo de la misma anualidad, se dispuso requerir a las doctoras Judith Beleño Beleño y Emi Johanna Chamorro Racero, jueza y secretaria, respectivamente, del Juzgado 1° Promiscuo de Familia de Mompox, para que suministraran información detallada del proceso referenciado, esto, porque al revisar el proceso en la plataforma de consulta TYBA de la Rama Judicial, se observa que lo requerido no ha sido tramitado.

1.3 Informe de verificación

Dentro de la oportunidad para ello, las doctoras Judith Beleño Beleño y Emi Johanna Chamorro Racero, jueza y secretaria, respectivamente, del Juzgado 1° Promiscuo de Familia de Mompox, rindieron informe bajo la gravedad de juramento (artículo 5° Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011); indica la funcionaria, que la demanda fue admitida el 15 de julio de 2022 y se ordenó emplazar a la demandada; dicho trámite se surtió con la inclusión en el registro nacional de personas emplazadas el 28 de julio del mismo año; por auto del 2 de septiembre de 2022, se nombró curador *ad litem*, quien presentó contestación de la demanda el 3 de octubre de la misma anualidad; luego, se dio traslado de las excepciones propuestas por fijación en lista el 25 de octubre de ese año.

Comunica, que mediante providencia del 10 de noviembre de 2022 se tuvo por contestada la demanda y que el 13 de abril de 2023 ingresó el proceso al despacho para

emitir pronunciamiento sobre las excepciones previas presentadas y dar trámite a las solicitudes allegadas por la solicitante.

Que por auto del 11 de mayo de 2023 se emite pronunciamiento sobre las excepciones previas y se fija fecha para llevar a cabo audiencia inicial, el 15 de junio de la presente anualidad.

Finalmente, expresa que los trámites procesales se han surtido conforme al flujo de evacuación del despacho, teniendo en cuenta los demás trámites, procesos, diligencias que se encuentran bajo su responsabilidad como titular del despacho.

Por su parte, la secretaria del despacho comunica que el proceso ingresa al despacho por primera vez el 14 de julio de 2022 para pronunciarse sobre la admisión, que el trámite de emplazamiento de la parte demandada se surtió con la inclusión en el registro nacional de personas emplazadas el 28 de julio de la misma anualidad; que el 2 de septiembre del mismo año ingresa el proceso al despacho para designar curador *ad litem*.

Que el 25 de octubre de 2022 se fijó en lista las excepciones previas propuestas por el curador *ad litem* en la contestación de la demanda; que el expediente ingresa al despacho el 10 de noviembre del mismo año para pronunciarse sobre la contestación de la demanda y que por auto de la misma fecha se tiene por contestada.

Indica la secretaria, que el 13 de abril de 2023 ingresa el proceso al despacho para resolver las excepciones previas propuestas y dar trámite a las solicitudes allegadas por la parte demandante y que por auto adiado 11 de mayo de la presente anualidad, el despacho resolvió las excepciones y fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial.

1.4 Explicaciones

Mediante auto CSJBOAVJ23-377 se resolvió aperturar la vigilancia judicial administrativa respecto de la doctora Judith Beleño Beleño, Jueza 1° Promiscuo de Familia de Mompox, y se le requirió que indicara las justificaciones, informes, documentos y pruebas que pretendieran hacer valer, para justificar la presunta mora judicial alegada, para lo cual se le otorgó el término de tres días contados a partir de su comunicación, la cual se surtió el 29 de mayo siguiente, término en el cual allegaron las explicaciones.

La funcionaria judicial en sus explicaciones reitera lo expuesto en el informe de verificación y adiciona que entre el 13 de abril de 2023 y el 11 de mayo del mismo año, se llevaron a cabo 14 audiencias y se profirió un fallo de tutela, por lo que considera que la tardanza de 8 días no fue injustificada.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es competente para conocer sobre la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por la abogada María Claudia Galvis Feria dentro del proceso de la referencia, conforme a lo prevenido en el artículo 1° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, reglamentario del numeral 6° del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, habida cuenta que la solicitud se dirige en contra de uno de los despachos judiciales de esta circunscripción territorial.

2.2. Alcances de la vigilancia judicial administrativa

El Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011, adopta el reglamento respecto del mecanismo de la vigilancia judicial administrativa consagrada en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y establece en su artículo 1° que se concibe *“para que la justicia se administre oportuna y eficazmente”* y que *“es diferente de la acción disciplinaria a cargo de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias”*, lo que conduce a inferir que el estudio se ciñe a determinar: *i) cuestiones de incumplimiento de términos actuales, porque las anomalías pasadas deben ser objeto de los procesos disciplinarios; ii) si un funcionario incurrió en acciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia; y iii) si existe una actuación en forma negligente o si, por el contrario, su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación.*

De otra parte, el artículo 14 del Acuerdo en comento prescribe: *“Independencia y autonomía judicial. En desarrollo de las actuaciones de vigilancia judicial administrativa, los Magistrados de la Sala Administrativa competente deberán respetar la autonomía e independencia de los funcionarios, de tal suerte que en ningún caso podrán sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones”*. Dicha norma se encuentra en consonancia con lo contemplado en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política y el artículo 5° de la Ley 270 de 1996, lo cual significa que la institución de la vigilancia judicial administrativa, como mecanismo administrativo que es, no está diseñado para controvertir decisiones judiciales, ni la forma como un funcionario interpreta una norma o valora las pruebas. Así mismo, es pertinente resaltar que este trámite no es otra instancia judicial y no puede emplearse para revivir términos.

En conclusión, esta atribución del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es de naturaleza eminentemente administrativa y separada de la función jurisdiccional disciplinaria contra jueces y abogados, que le corresponde a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

2.3. Planteamiento del problema a resolver

Conforme a la solicitud de vigilancia judicial administrativa y lo informado por los servidores judiciales, corresponde a esta Corporación determinar si han existido actuaciones y omisiones en el decurso de la actuación dentro del proceso de la referencia, en específico sobre la mora judicial alegada, que involucren un actuar u omisión contraria a la oportuna y eficaz administración de justicia.

En caso de estimarse lo anterior, atendiendo a que el solicitante enuncia circunstancias de mora judicial, se determinará la procedencia de la imposición de correctivos administrativos o compulsas de copias a la jurisdicción disciplinaria contra el servidor judicial determinado.

2.4. El derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8°, prevé dentro de las garantías procesales, el derecho de toda persona *“a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable (...)”*.

Por su parte, la Constitución Política en sus artículos 29 y 229 consagran los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, respectivamente, lo cuales comprenden las prerrogativas que se enuncian a Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.
Teléfono: 6647313. www.ramajudicial.gov.co
Correo electrónico: consecbol@cendoj.ramajudicial.gov.co
Cartagena – Bolívar. Colombia

continuación: i) el derecho que tiene toda persona de poner en funcionamiento el aparato judicial, ii) el derecho a obtener una respuesta oportuna, y iii) el derecho a que no se incurran en omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones judiciales.

La anterior consagración implica el deber de todas las autoridades públicas de observar de manera diligente los términos y adelantar de manera oportuna los trámites judiciales de que conoce, en tanto su inobservancia y la dilación injustificada “(...) *pueden conllevar la vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración en general, y a la administración de justicia en particular*”, amén de resultar lejana la efectividad de una justicia material en el caso concreto.

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha considerado también que “*el incumplimiento de los plazos judiciales tiene un carácter excepcional, pues la regla general, contenida en el artículo 228 superior, es la obligatoriedad de los términos procesales*”, en ese sentido, se admite en casos excepcionales que el incumplimiento de los términos procesales no le es directamente atribuible al funcionario judicial en tanto “*la mora, la congestión y el atraso judiciales son algunos de los fenómenos que afectan de manera estructural la administración de justicia en Colombia*”.

En ese orden, con relación a la mora judicial, mediante sentencia T-052 de 2018, la Corte Constitucional precisó:

“La mora judicial es un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos.

(...)

Dentro del deber de garantizar el goce efectivo del derecho, se encuentra incluida la solución celeré de los asuntos adelantados ante funcionarios judiciales, por ello, esta Corte ha determinado la prohibición de dilaciones injustificadas en la administración de justicia (...).

Al respecto, en Sentencia T-230 de 2013, reiterada en la T-186 de 2017, entre otras, la Sala Tercera de Revisión expuso las circunstancias en las cuales se configura la mora judicial injustificada: “(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial”.

(...)

En el mismo fallo, se enunciaron las circunstancias en las que se encuentra justificado el incumplimiento de los términos judiciales señalados por la jurisprudencia constitucional, resumidos de la siguiente manera: “(i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley”.

También respecto a este asunto, el Consejo de Estado ha expresado: “(...) *no existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que esta debe ser injustificada, debe*

Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.

Teléfono: 6647313. www.ramajudicial.gov.co

Correo electrónico: consecbol@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cartagena – Bolívar. Colombia

estar probada la negligencia de la autoridad judicial demandada y que sea probable la existencia de un perjuicio irremediable. Si por el contrario, la actuación de los falladores de instancia es celeré y diligente, pero por circunstancias imprevisibles no es posible dar cumplimiento a los términos judiciales, tampoco se configura la alegada mora judicial”.

Quiere decir lo anterior, que para determinar si se está o no frente a una dilación justificada es necesario realizar un análisis valorativo y la comprobación de las circunstancias en el caso concreto, *“juicio ciertamente complejo en el que “deben tomarse en consideración las circunstancias particulares del despacho que adelanta la actuación y del trámite mismo, entre las que se cuentan: i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión de la dependencia, ii) el cumplimiento de las funciones propias de su cargo por parte del funcionario, iii) la complejidad del caso sometido a su conocimiento y iv) el cumplimiento de las partes de sus deberes en el impulso procesal”.*

Por tanto, la omisión o dilación en el cumplimiento de los términos procesales en cuanto su relevancia constitucional está ligada a la relación intrínseca entre la carga funcional y el cumplimiento de los deberes a su cargo.

En conclusión, puede afirmarse válidamente, que de conformidad con la jurisprudencia sentada por estas corporaciones, la mora judicial que configura vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, se caracteriza por (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente, (ii) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora es debida a circunstancias que no puede contrarrestar y directamente relacionada con el punto anterior, y, (iii) la omisión en el cumplimiento de sus funciones por parte del trabajador, debido a la negligencia y desidia respecto de sus obligaciones en el trámite de los procesos.

A su turno, cuando se presenta un incumplimiento de los términos procesales, la prosperidad de las causales eximentes de sanción administrativa corresponde examinarlas en cada caso concreto. El incumplimiento de los términos se entiende justificado *“(i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constatan problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución del caso en el plazo previsto en la ley”.*

Lo descrito en precedencia, fue tenido en cuenta en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, cuando en el artículo 7º dijo:

“(…) la respectiva Sala Administrativo del Consejo Seccional de la Judicatura, decidirá si ha habido un desempeño contrario a la administración oportuna y eficaz de la justicia en el preciso y específico proceso o actuación judicial de que se trate.

Para el efecto se tendrá en cuenta que el hecho no obedezca a situaciones originadas en deficiencias operativas del despacho judicial, no atribuibles al servidor judicial, así como los factores reales e inmediatos de congestión no producidos por la acción u omisión del funcionario o empleado requerido, todo lo cual lo exime de los correctivos y anotaciones respectivas”.

Implica lo anterior, que en el trámite de una vigilancia judicial administrativa cada caso concreto debe analizarse de manera particular y observarse las circunstancias propias

Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.

Teléfono: 6647313. www.ramajudicial.gov.co

Correo electrónico: consecbol@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cartagena – Bolívar. Colombia

del despacho vigilado así como la gestión del servidor judicial, entre esos aspectos, la carga efectiva, los ingresos efectivos y la productividad entre otros, que permitan concluir, en el evento de no acatarse el término perentorio e improrrogable, la existencia de razones no sólo que la expliquen sino que la justifiquen, pues no es admisible que frente a circunstancias objetivas de dificultad en la gestión judicial se exija el cumplimiento inexorable de los términos, pues si bien su incumplimiento es sancionable, tal hecho *“se exculpa cuando se presenta una causa extraña o cuando se desborda la capacidad física del funcionario con la cantidad de trabajo que le corresponde en ese determinado momento (...)”*.

2.5. Caso concreto

La abogada María Claudia Galvis Feria solicitó que se ejerza vigilancia judicial administrativa sobre el proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio identificado con el radicado No. 13-468-3184-001- 2022-00052-00, que cursa en el Juzgado 1° Promiscuo de Familia de Mompox, debido a que, según afirma, el proceso se encuentra pendiente por fijar fecha para audiencia inicial.

Frente a las alegaciones del peticionario, las doctoras Judith Beleño Beleño y Emi Johanna Chamorro Racero, jueza y secretaria, respectivamente, del Juzgado 1° Promiscuo de Familia de Mompox, indican que el 13 de abril de 2023 ingresó el proceso al despacho para emitir pronunciamiento sobre las excepciones previas presentadas y dar trámite a las solicitudes allegadas por la solicitante.

Que por auto del 11 de mayo de 2023 se emite pronunciamiento sobre las excepciones previas y se fija fecha para llevar a cabo audiencia inicial el 15 de junio de la presente anualidad.

Revisadas la solicitud de vigilancia judicial administrativa y, el informe rendido bajo la gravedad de juramento, se tiene que dentro del proceso de la referencia se surtieron las siguientes actuaciones:

No.	Actuación	Fecha
1	Solicitud fijación fecha audiencia inicial	26/01/2023
2	Memorial de impulso	13/03/2023
3	Pase secretarial al despacho	13/04/2023
4	Comunicación requerimiento de informe dentro de la solicitud de vigilancia	10/05/2023
5	Auto resuelve excepciones previas y fija fecha para audiencia inicial	11/05/2023

Descendiendo al caso en concreto, se tiene que el objeto de la solicitud de vigilancia judicial administrativa se ciñe en la presunta mora en la que se encuentra incurso el Juzgado 1° Promiscuo de Familia de Mompox en fijar fecha para llevar a cabo audiencia inicial.

Del informe aportado, se tiene que el 11 de mayo de 2023 se profirió auto mediante el cual se pronuncia sobre las excepciones previas propuestas y se fija fecha para llevar a cabo audiencia inicial, esto, con posterioridad a la comunicación del requerimiento de informe efectuado por esta Seccional, lo que ocurrió el 10 de mayo hogafío, por lo que se tiene que dicha actuación fue adelantada con ocasión del presente trámite

administrativo.

En relación a la actuación de la doctora Judith Beleño Beleño, jueza, se tiene que, entre el pase al despacho del expediente, el 13 de abril de 2023 y el auto que resuelve las excepciones previas y fija fecha para audiencia inicial, el 11 de mayo del mismo año, transcurrieron 18 días hábiles, encontrándose una mora de 8 días, de conformidad con lo establecido en el artículo 120 del Código General del Proceso.

“ARTÍCULO 120. TÉRMINOS PARA DICTAR LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES POR FUERA DE AUDIENCIA. En las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los jueces y los magistrados deberán dictar los autos en el término de diez (10) días y las sentencias en el de cuarenta (40), contados desde que el expediente pase al despacho para tal fin (...).”

Lo anterior en consonancia a lo consagrado en el artículo 153 de la Ley 270 de 1996, a saber:

“ARTÍCULO 153. DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes: (...)
2. Desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo. (...)
5. Realizar personalmente las tareas que les sean confiadas y responder del uso de la autoridad que les haya sido otorgada o de la ejecución de las órdenes que puede impartir, sin que en ningún caso quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la que corresponda a sus subordinados. (...)

No obstante, no puede perderse de vista lo argumentado por la funcionaria judicial en sus explicaciones, donde aduce que la tardanza de 8 días presentada tuvo origen en los trámites que adelantó entre el 13 de abril de 2023 y el 11 de mayo del mismo año, periodo en el que se llevaron a cabo 14 audiencias y se profirió un fallo de tutela; así anexa las actas de audiencias y providencias proferidas, de manera que se puede corroborar que la demora no fue injustificada y, que por el contrario, se encontraba llevando a cabo actuaciones en procesos de naturaleza penal y constitucional, los cuales revisten prioridad.

Así las cosas, bajo ese supuesto, se tendrá que la actuación se adelantó dentro de un *plazo razonable*; esto, en consonancia con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC3377-2021 indicó que:

“(...) las personas tienen derecho «a obtener una decisión motiva[da] y razonable que ponga fin a la controversia planteada», amén del «derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso (...) el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia, garantías de raigambre fundamental, disciplinan que las actuaciones judiciales se adelanten, y las resoluciones se adopten, en un lapso prudencial, en tanto los ciudadanos no pueden estar bajo la zozobra de la incertidumbre temporal (...) (Subrayado fuera del texto original)

De igual manera, indica “(...) este Tribunal ha señalado que el ‘plazo razonable’ al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención se debe apreciar en relación con la

duración total del procedimiento que se desarrolla hasta que se dicta la sentencia definitiva.

(...)

La Corte usualmente ha considerado los siguientes elementos para determinar la razonabilidad del plazo del proceso judicial: a) complejidad del asunto; b) actividad procesal

del interesado; c) conducta de las autoridades judiciales, y d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso (...)”.

Así las cosas, bajo ese supuesto, no habría lugar a aplicar los correctivos determinados en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011 respecto de la doctora Judith Beleño Beleño, jueza 1° Promiscuo de Familia de Mompox.

Ahora, con relación a la secretaria de esa agencia judicial, se observa, que, entre la presentación de la solicitud, el 26 de enero de 2023 y el ingresó al despacho del expediente, el 13 de abril del mismo año, transcurrieron 49 días hábiles, término que supera el establecido en el artículo 109 del Código General del Proceso.

“ARTÍCULO 109. PRESENTACIÓN Y TRÁMITE DE MEMORIALES E INCORPORACIÓN DE ESCRITOS Y COMUNICACIONES. El secretario hará constar la fecha y hora de presentación de los memoriales y comunicaciones que reciba y los agregará al expediente respectivo; los ingresará inmediatamente al despacho solo cuando el juez deba pronunciarse sobre ellos fuera de audiencia. Sin embargo, cuando se trate del ejercicio de un recurso o de una facultad que tenga señalado un término común, el secretario deberá esperar a que este transcurra en relación con todas las partes (...)”.

Lo anterior, en consonancia a lo consagrado en el artículo 153 de la Ley 270 de 1996, a saber:

“ARTÍCULO 153. DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según

corresponda, los siguientes:

(...)

2. Desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo. (...)

5. Realizar personalmente las tareas que les sean confiadas y responder del uso de la autoridad que les haya sido otorgada o de la ejecución de las órdenes que puede impartir, sin que en ningún caso quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la que corresponda a sus subordinados. (...)

20. Evitar la lentitud procesal, sancionando las maniobras dilatorias, así como todos aquellos actos contrarios a los deberes de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe (...)”.

Así las cosas, se observa entonces, la tardanza de 49 días hábiles en la que incurrió la secretaria de esa agencia judicial en ingresar el proceso al despacho, sin que se hayan indicado argumentos o circunstancias que lo justifiquen, por lo que habrá de ordenarse la compulsión de copias de la presente actuación con destino a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, para que investigue la conducta desplegada por la doctora Emi Johanna Chamorro Racero, secretaria del Juzgado 1° Promiscuo de Familia de Mompox, conforme al ámbito de su competencia.

De conformidad con lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,

Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.

Teléfono: 6647313. www.ramajudicial.gov.co

Correo electrónico: consecbol@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cartagena – Bolívar. Colombia

III. RESUELVE

PRIMERO: Archivar la vigilancia judicial administrativa promovida por la abogada María Claudia Galvis Feria dentro del proceso identificado con el radicado No. 13-468-3184-001-

2022-00052-00, que cursa en el Juzgado 1° Promiscuo de Familia de Mompox, por las razones esbozadas en la parte motiva.

SEGUNDO: Compulsar copias de la presente actuación con destino a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar para que, en atención a lo anotado, investigue la conducta desplegada por la doctora Emi Johanna Chamorro Racero, secretaria del Juzgado 1° Promiscuo de Familia de Mompox, en el trámite del proceso de marras, conforme al ámbito de su competencia.

TERCERO: Comunicar la presente resolución a la solicitante y a las doctoras Judith Beleño Beleño y Emi Johanna Chamorro Racero, jueza y secretaria, respectivamente, del Juzgado 1° Promiscuo de Familia de Mompox.

CUARTO: Contra esta decisión solo procede recurso de reposición, que deberá ser interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación o comunicación, ante esta misma corporación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, art. 74 y siguientes.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



IVÁN EDUARDO LATORRE GAMBOA
Presidente (E)

MP. IELG/MFLH